REPÚBLICA DEL ECUADOR
FUNCIÓN JUDICIAL

Juicio No: 13177202300014, PRIMERA INSTANCIA, número de ingreso 1

Casillero Judicial No: 0

Casillero Judicial Electrónico No: 0

Fecha de Notificación: 24 de noviembre de 2023

A: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MANTA

Dr / Ab:

TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE MANTA

En el Juicio No. 13177202300014, hay lo siguiente:

VISTOS.- Por el sorteo que data miércoles 10 de noviembre de 2023, a las 16h55, (fs. 20), ha correspondido a este Tribunal, investidos de competencia en materia constitucional, el conocimiento de la presente causa, a fin de resolver la presente acción de protección presentada por el ciudadano Manuel Agapito Muñoz Pita, en contra de la abogada Marciana Valdivieso Zamora y abogada Iliana Gutiérrez Toromoreno; en sus calidades de Alcaldesa y Procuradora Síndica Municipal, respectivamente; luego de la calificación de la demanda y convocada la audiencia respectiva, el Tribunal integrado por el abogado José Luis Alarcón Bowen, Juez de sustanciación; abogado Carlo Fuentes Zambrano, Juez; y, abogada Lorena Romero Cedeño, Jueza; se constituye en Audiencia Oral, Pública, para resolver la mencionada acción de protección y llevada a cabo la audiencia respectiva el día 16 de agosto a las 12h00, con la presencia del accionante Manuel Agapito Muñoz Pita; de su patrocinador, abogado Darwin Zambrano San Clemente; mientras que por la parte accionada comparecieron los abogados María Cecilia Menéndez Palacio y Rubén Franco en representación de los accionados; sin que haya comparecido la Procuraduría General del Estado a pesar de estar legalmente notificada; así como habiendo deliberado y dado a conocer oralmente a los sujetos procesales su decisión, de por voto de mayoría **NEGAR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN PLANTEADA**, existiendo un voto de minoría que aceptó dicha acción constitucional; este Tribunal para cumplir con lo que dispone el número 3 del artículo 15 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, reduce a escrito su resolución, y en observancia a lo previsto en el artículo 76 número 7 letra l) de la Constitución de la República, concordante con el artículo 130 número 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, fundamenta y expone:

I.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. – Conforme el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el contenido del artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, este Tribunal como juez pluripersonal es competente para conocer y resolver la causa.

II.- VALIDEZ PROCESAL.- Este Tribunal de Garantías Penales, con competencia en materia constitucional ha respetado las normas del debido proceso constitucional haciendo efectivo los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República y en los Instrumentos Internacionales, esto es, observando el mandato de su inmediata y directa

aplicación, pero también observando irrestrictamente el mandato contenido en la letra l) del número 7 del artículo 76 de la carta magna inherente a la motivación de toda resolución que incida sobre los derechos de las partes. A pesar de que las acciones de naturaleza constitucional son menos formalizadas que las ordinarias, no se ha omitido, en el presente caso, solemnidad sustancial que pueda nulificar la validez del presente proceso constitucional por lo que este pluripersonal lo declara válido.

III.- FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

III.1 FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

Conforme lo determina el artículo 88 de la Constitución, la acción de protección tiene “(...) *por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial;*”^[1] en concordancia con dicha norma, el artículo 39 de la LOGJCC reitera dicho objeto y amplía el amparo a los derechos reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos; asimismo, hace constar que se excluye a los derechos amparados por las otras garantías jurisdiccionales, esto es, a los derechos que protege la acción de hábeas corpus, a la información pública, hábeas data, por incumplimiento; extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra las decisiones de la justicia indígena.^[2]

La Corte Constitucional del Ecuador ha reiterado en algunas de sus sentencias que la acción de protección tiene como objeto “(...) *tutelar y salvaguardar los derechos constitucionales, cuya pretensión procederá cuando su vulneración se efectúe por cualquier acto u omisión de autoridad pública no judicial o de particulares.*”^[3] La Corte determina que la “(...) *esencia de la acción de protección (...) es la de constituirse en el procedimiento adecuado para conocer y verificar la vulneración de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos*”^[4]

De los conceptos vertidos se determina que la acción de protección tiene como objeto la tutela de derechos constitucionales reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales de derechos humanos, que han sido vulnerados, violados, menoscabados, disminuidos, anulados o que se impida su goce o su ejercicio, por una autoridad pública no judicial o particulares en ciertas circunstancias.

III.2 DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Declarada constitucionalmente instalada la presente audiencia de Acción de Protección, bajo el amparo normativo contenido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se concedió el uso de la palabra a los sujetos de la relación procesal a fin de que fundamenten sus posturas jurídicas, quienes expusieron:

ACCIONANTE

El accionante, **Manuel Agapito Muñoz Pita**, a través de su abogado particular, el **abogado Darwin Zambrano San Clemente**, manifestó en lo principal: *“La presente acción se presenta en contra de la Municipalidad del Cantón Manta a través de personería de su alcaldesa la señora Marciana Valdivieso Zamora y a su vez contra los procuradores síndicos del GAD Manta, así mismo, logro manifestar que dentro del presente caso esta acción de protección se presenta por cuanto se requiere examinar si existe o no la vulneración del derecho el cual, más adelante lo especificaré, en cuanto a las garantías Constitucionales dentro del debido proceso del derecho a la propiedad. Señores jueces el presente caso inicia por cuanto el señor Manuel Agapito Muñoz Pita es propietario de un lote de terreno ubicado en las inmediaciones de sitio Barbasquillo o en la parte posterior de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en este lugar el Municipio ha empezado a construir una obra que constituye en trazar una vía de dos carriles que conecta entre la ciudadela universitaria y la C32 o vía Barbasquillo como se la conoce, pero resulta que al momento de realizar esta obra el Municipio no toma en consideración el procedimiento legal que corresponde y ha procedido a ocupar dicha parte de esta propiedad, propiedad del señor Manuel Agapito Muñoz Pita y ha procedido a tumbar el cerramiento que fue construido por columnas de hormigón armado y cerramiento de mallas con estructuras metálicas de tubos galvanizados, esto sin mediar ningún tipo de autorización, sin mediar algún tipo de procedimiento legal, sin mediar ningún tipo de notificación, y sin mediar ningún tipo de declaratoria de utilidad pública, sin mediar ni siquiera ningún tipo de indemnización por la ocupación de dicha parte del predio, el cual esta siendo afectado. Ante esto se vio la necesidad de acudir ante ustedes en calidad de jueces garantistas de derechos constitucionales a efecto de que se declare la vulneración de sus derechos, contenidos en el artículo 76 de la Constitución en su numeral 1, numeral 7 literal A, B, C, D, L, M así mismo lo contenido en el artículo del derecho consagrado del artículo 321, el artículo 323 y el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Así mismo se han vulnerado los derechos y garantías Constitucionales consagradas en el artículo 85 numeral 1 y 2 de la Constitución, de esta manera y con esta previa introducción expongo los antecedentes que han originado esta Acción Constitucional de Protección; como ya lo he indicado el Municipio tenía el deber de notificar al hoy accionante con una declaratoria de utilidad pública previamente de hacer uso del predio del cual el señor Manuel Agapito Muñoz Pita es propietario y esto constituye en resumen como una confiscación del bien por cuanto no han mediado procedimiento alguno para poder realizar la ocupación, y sobre todo el derribamiento de la infraestructura o cerramiento que se encontraba implantada en dicho lugar como delimitación de la propiedad, esto a más de que ha causado la vulneración de los derechos tanto de la seguridad jurídica al debido proceso, se ha confiscado parte de la propiedad del señor Manuel Agapito Muñoz Pita, y además ha expuesto ante la gran ola de inseguridad de que ese bien sea vulnerado por los dueños de lo ajeno por cuanto se ha extraído todo tipo de seguridad al derribar el cerramiento de dicha propiedad, esto incluso le ha ocasionado un gasto a mi defendido por cuanto ha tenido la necesidad de recurrir a una guardianía privada para poder proteger a su familia ante la ola de inseguridad por cuanto ha quedado completamente desprotegida dicha propiedad al ser derribado su cerramiento sin ningún tipo de notificación. En tal virtud y para concluir, debo manifestar que dicho acto y omisión por parte del Municipio ha provocado la vulneración del derecho contenido en el artículo 321, 323 de la Constitución de la República, ha vulnerado el derecho de la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución, a vulnerado el derecho a la garantía del debido proceso porque no se ha respetado el procedimiento que establece la ley para este*

tipo de caso tanto como la declaratoria de utilidad pública y expropiación establecido tanto en la Ley de Contratación Pública, se ha vulnerado el derecho a la motivación porque no se le ha notificado por ningún medio al señor Manuel Agapito Muñoz Pita con dicho procedimiento en la cual tenga él el completo conocimiento de porque razón le van a expropiar dicha propiedad, se ha vulnerado el derecho a la defensa y se ha vulnerado el derecho de recurrir al fallo, ante esta capa de vulneración de derecho solicitamos que se declare la vulneración de los derechos ante mencionados, y en sentencia se condene o ordene la reparación integral de los daños materiales e inmateriales, y esto es el pago de la indemnización de conformidad cómo lo establece la ley y que se disponga la inmediata construcción y colocación del cerramiento donde debe quedar implantado el colín del predio con la vía en construcción, así mismo, que el predio del accionante sea reparado o se restablezca en su estado anterior conforme se encontraba antes de la vulneración del derecho.”

ACCIONADO

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta, en las interpuestas personas del abogado Agustín Intriago Quijano alcalde del cantón Manta y abogada Iliana Jazmín Gutiérrez Toro Moreno Procuradora Síndica Municipal; representados por los abogados **María Cecilia Menéndez Palacio y Rubén Franco**, en lo principal manifestaron: *“Si bien es cierto la presente acción lo que trata es de garantizar el amparo directo de los derechos reconocidos en la Constitución, tengo que manifestarle a ustedes lo siguiente, en el presente caso ha existido y se ha emitido a través de la máxima autoridad del GAD Manta en su momento el abogado Agustín Intriago una resolución ejecutiva, la misma que está asignada con número MDA2023ALC087 la cual fue suscrita a los 14 días del mes de julio del año 2023, dicha resolución ejecutiva se la hizo en base a lo que establece el artículo 60 del COOTAD en donde se le otorga la facultad ejecutiva a la máxima autoridad de los GAD para poder realizar este tipo de resoluciones, ahora bien, bajo todas las competencias municipales especialmente la consagrada en el artículo 264 de la Constitución respecto a la capacidad que tenemos de planificar obras para ejercer el control de lo que es la jurisdicción cantonal de Manta, así mismo como la capacidad de tenemos a través del artículo 54 del COOTAD de poder realizar o promover obras que sean de desarrollo sustentable de la ciudad de Manta, se realizó una declaratoria de servidumbre real como sabemos esta declaratoria se encuentra contemplada en el artículo 488 de COOTAD y de manera textual señala “el municipio o distrito podrá interponer servidumbre real en los casos que sean indispensables para la ejecución de obras destinadas a la prestación de un servicio público” ahora bien, de igual manera en el apartado final de este artículo señala “en los casos que dicha ocupación afecte a las construcciones existentes del propietario deberá ser indemnizado” si bien es cierto podemos tener en cuenta que en el mismo artículo también explica que se puede aplicar esta servidumbre y la misma no debe, como tal, un pago indemnizatorio en razón de que no debe sobrepasar el 10% del valor total del predio, en este caso en concreto se les va a demostrar a sus autoridades lo que se utilizó en realidad de servidumbre real fue el 1.12% del predio total que se encuentra hoy siendo objeto de análisis. Ahora bien, como sabemos esta resolución es un acto administrativo, para que el acto administrativo sea eficaz debe de ser notificado a las partes, debo de hacerle mención de sus autoridades que tal y como lo establece el artículo 164 de COA este acto fue debidamente notificado a través de los canales de comunicación o medios de comunicación tal y como la*

mima norma lo establece, señores jueces, para poder hacer un mayor entendimiento del presente caso hemos solicitado al departamento de secretaria del consejo cantonal quienes nos han certificado copias debidamente certificadas, las publicaciones realizadas como tal en el diario de mayor circulación tal y como lo establece el artículo 167 y 168 del COA en donde se le notifica a varias personas incluidas en el punto 15 al señor Muñoz Pita Manuel Agapito con cédula 1176307000 de que se le iba aplicar una servidumbre real sobre su predio, él mismo ya se lo acaba de manifestar específicamente sobre el porcentaje 1.12%, dichas publicaciones fueron realizadas en dos días, la primera fue en el 20 de septiembre del 2023 siendo la segunda el 22 de septiembre del 2023. Ahora bien, respecto del posible derrocamiento o en este caso del retiro de las vallas esta municipalidad de Manta acogiendo lo que establece el mismo código civil en su artículo 747 señala “cuando se limita el dominio de un predio”, el numeral 4 señala “por servidumbre”, de igual manera también señala el artículo 868 del mismo Código Civil que “quien goce de servidumbre puede ejecutar obras indispensables para ejercerla” en este caso de acuerdo a la información proporcionada por el departamento de Obras Públicas mediante mejorando MTADNOPNOM161120230843 pone en conocimiento de esta procuraduría síndica lo siguiente “con fecha 20 y 22 de septiembre se realizaron a través de la prensa del periódico La Marea se publicó la resolución MTA2023ALC087 en donde la máxima autoridad bajo su capacidad declaró este bien o una porción de este bien específicamente 1.12% como un servidumbre real sobre el bien de la persona hoy accionante, en su parte final señala “Conclusiones, respecto a la colocación de materiales de estructura vial (y qué ustedes podrán observar y que oportunamente lo haré) se encuentra en sí un bien que se encuentra sin vivienda alguna simplemente se encuentra cercado” respecto al retiro de malla que él manifiesta dice “esta actividad fue realizada efectivamente el día 9 de noviembre el 2023 por parte del contratista del consorcio Hidro Manta en coordinación con el acampamiento de la fiscalización del mismo consorcio” ahora bien, porque hago mención a esta fecha en específica, porque la resolución surgió al 14 de julio del 2023 fue notificada legalmente tal y como faculta el COA este acto administrativo el día 20 y 22 de septiembre del 2023, pero las actuaciones por parte del GAD Manta fueron como tal realizadas a partir del 9 de noviembre del 2023 es decir posterior a la debida notificación del hoy accionante. Respecto a la solicitud del accionante, respecto a sus pretensiones, en lo que se refiere específicamente al pago de costas procesales debemos de conocer nosotros que tal y como lo establece el mismo COGEP en el artículo 284 el Estado no puede ser condenado al pago de costas procesales, de igual manera, en lo que ellos referían en sus solicitud iniciales por escrito, respecto a la paralización de la obra debemos también tener en cuenta el artículo 6 del mismo COOTAD en donde se refiere a las garantías de autonomía que tenemos como GAD y en donde ninguna autoridad podrá interferir pero aun en paralización de obras que son en beneficio, la situación aquí radica en que se ha determinado en que esta obra que es de gran realce para la ciudad de Manta se denomina “Construcción de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de Obras Complementarias de la Parroquia de Manta, Ciudad de Manta”. Respecto a los documentos que han sido practicados por parte del municipio los pongo en consideración de la parte contraria por principio de contradicción, por tal razón señores jueces dentro de la presente acción no existe alguna vulneración de derechos Constitucionales, por lo cual se puede establecer una improcedencia tal y como se establece en el mismo artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional numeral 1 y 5”.

RÉPLICA PARTE ACCIONANTE:

“Exclusivamente me voy a referir sobre lo mencionado por el defensor síndico del Municipio, menciona inicialmente sobre el artículo 164 que habla específicamente de la notificación en el COA en este sentido es bastante claro al indicar que existen 2 formas de notificación, la primera en persona y la segunda por medio de los medios de comunicación; en el segundo caso los medios de comunicación se utilizan cuando no es posible notificar o citar en persona a las personas (en este caso los afectados), hecho que no ha cumplido el municipio porque si bien es cierto el representante o procurador síndico del Municipio indica que la dicha resolución se expidió el 14 de julio del año 2023, para el 17 de julio del 2023 el señor Manuel Agapito Muñoz Pita ya se encontraba consignado en el correo electrónico en el portal ciudadano de la Municipalidad del cantón Manta, es decir, que tenía el deber de notificarlo a ese correo electrónico y si aludir que no existe otro correo electrónico registrado en dicha entidad, por tanto no se lo notificó a sabiendas de que aún se encontraba registrado en dicho correo electrónico. En segundo lugar, la declaratoria de utilidad pública conforme consta en el certificado de solvencia indica sobre la resolución número MTA2023ALC-083 si nos dirigimos al portal ciudadano a referirnos al sistema del municipio impulsamos o aplicamos precisamente a donde consta ese tipo de numeración de resolución sale la resolución número MTA-0232023- ALC120 que habla precisamente y exclusivamente de la delegación que le confieren a los abogados aquí presentes para poder intervenir dentro de los procesos judiciales en contra de los municipios, no habla bajo ningún concepto, motivo o causa sobre la resolución a la cual hacen alusión en cuanto al procedimiento de la construcción de la obra que a afectado el bien del señor Manuel Agapito Muñoz Pita , es decir, que no se ha cumplido el deber que tiene el Municipio de notificar en legal y debida forma, porque tendrían que hacerlo primero en persona y una vez que se lo notificaba en persona porque así lo dice el COA de que se lo debe notificar en su domicilio de manera personal y en caso de que no exista persona alguna que reciba dicha notificación debe de pegarlo en uno de los parantes del domicilio o habitación del afectado o solicitado y tomarle una foto que evidencia de que efectivamente se lo notificó en persona, cuando ya ese hecho haya sucedido ahí es donde ya tienen la facultad de poder realizar las notificaciones por medios de la prensa, hechos que ellos lo han evacuado a pesar de ser el primer requisito, así dice el artículo 166 notificación por boleta, dice, “si no se encuentra personalmente la persona interesada se la notificará como contenido administrativo en medio de dos boletas que se entregarán días distintos en su domicilio o residencia cualquier persona de la familia, sino se encuentra persona alguna a quien entregarla se fijaran en la puerta o lugar de ubicación”, hecho que jamás lo han realizado ni tampoco lo han justificado. En cuanto a la declaratoria de utilidad pública sobre la servidumbre real a la que hacen alusión la otra contra parte accionada, precisamente hay que basarnos exclusivamente al último inciso en el artículo 488 que es muy claro al indicar en que “ los casos de que dicha ocupación afecte o desmejore las construcciones existentes el propietario deberá ser indemnizado considerando el valor de la propiedad determinada en la forma prevista de la Ley Orgánica de Contratación Pública“ la misma que indica lo siguiente Declaratoria de utilidad pública artículo 58 “cuando la máxima autoridad de la institución pública a resuelto adquirir un determinado bien inmueble necesario para la satisfacción de las necesidades públicas procederá a la declaratoria de utilidad pública de interés social de acuerdo con la Ley, (artículo 488 que hace alusión la parte accionada) a la declaratoria se adjuntará el certificado registrado de la propiedad, el avalúo establecido por la Dependencia de Avalúo y Catastro del respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado y Metropolitano, la certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de

los recursos necesarios para el efecto (es decir, que debe de contar con recursos para la declaratoria del lugar y pagar la indemnización correspondiente) y el anuncio del proyecto en el caso de la construcción de obras de conformidad con la Ley que regula el uso del suelo”, la declaratoria se notificará dentro de los 3 días de haberse expedido a los propietarios de los bienes expropiados y los poseionarios acreedores hipotecarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 164 del COA, hechos que no han sucedido. El artículo 58.1 indica que “la negociación y precio perfeccionada a la declaración de utilidad pública y de interés social se buscará un acuerdo directo entre las partes hasta el plazo máximo de 30 días sin perjuicio a la ocasión inmediata del bien, para que proceda la ocupación inmediata se debe realizar el pago o la consignación en caso de existir acuerdo”, aquí jamás se llegó a un acuerdo con la parte accionante y jamás se le consignó dicha indemnización cuando es uno de los requisitos primordiales para que proceda la declaratoria de utilidad pública, es decir, que el Municipio sobrepasó ese límite que le establece la ley, se transgredió normas legales y expresas, y declaró una utilidad pública sin antes consignar los valores que le corresponden al señor Manuel Agapito Muñoz Pita, él señor no se opone a la construcción de la misma siempre y cuando se cumpla con todo lo que la ley prevé para este tipo de procedimiento. Con esto finalizo, ya que ha quedado evidenciado de que en primer lugar no se cumplió con la notificación conforme lo establece la ley, tampoco se cumplió con el procedimiento legal para la declaratoria de utilidad pública y la expropiación de dicha propiedad, así mismo, se dejó claro de que no se notificó a pesar de que el Municipio contaba con toda la información registrada en el portal ciudadano para poder hacer la notificación a través del correo electrónico o cualquier medio digital apropiado para que el señor tenga conocimiento de dicho acto lo cual no ha sucedido, así mismo señor juez, pongo a su conocimiento y a conocimiento de la parte accionada el área el cual está siendo afectada y para ello se realizó un informe pericial realizado por el perito calificado por el Consejo de la Judicatura el señor Shuwen Ignacio Trevo Reyes quien en su informe a indicado todas las medidas de linderos y el área que está siendo afectada por la intervención del Municipio, ha especificado también cuales eran las características de construcción del bien también ha adjuntado fotografías de la derribación de la construcción del cerramiento la cual pues a precedido a realizar el Municipio, con este informe pericial determino cual es el área de construcción que está siendo afectada para efectos de cálculo del pago de la indemnización que corresponde y al fin de también demostrar la afectación y la vulneración de los derechos constitucionales, así mismo, se solicitó un certificado de Avalúo y Catastro del Municipio el cual fue realizado y solicitado con fecha 10 de noviembre del año 2023 el cual todavía no ha dado respuesta, no ha emitido dicho certificado, por lo cual simplemente adjunto captura como constancia de lo indicado. Sin embargo, dentro de dicha información digital en el sistema aparece un avalúo por metro cuadrado de \$150 los cuales los tomo como referencia para poder juzgar el monto de la indemnización, pongo a disposición del Gobierno Autónomo Descentralizado por principio de contradicción a efectos de que proceda revisar dicho documento, y me reservo el derecho a que el perito pueda ser llamado a explicar su informe”.

RÉPLICA ACCIONADO:

“Señor juez yo creo que aquí existe una confusión de lo que es una declaración de utilidad pública y una servidumbre real, lo que nos compete a nosotros analizar es específicamente el artículo 488 del COOTAD no hay nada más, este artículo es claro, con decir la necesidad

por parte de la institución en este caso el GAD Manta para poder ejecutar obras se puede aplicar lo que es una servidumbre real y el artículo también es claro, cuando solo se interviene el porcentaje inferior al 10% no corresponde indemnización alguna, en el presente caso ha quedado demostrado por esta Municipalidad de Manta que el porcentaje aplicado es solo 1.12% dentro de la totalidad del bien, por lo tanto no se incurre como tal en ninguna posible indemnización. Como lo manifesté anteriormente, el mismo Código Civil nos establece que nosotros podemos hacer uso de esta servidumbre desde el momento en que es declarada como tal, ahora respecto a la posible falta de notificación o indebida notificación nosotros hemos cumplido con lo que establece el artículo 168 del COA que dice que puede realizarse en dos notificaciones, en este caso por la prensa fue realizada a través del diario La Marea, en lo que respecta que porque nosotros acudimos directamente a una notificación por medio de un medio de comunicación, el artículo 167 también nos establece el mismo COA que la notificación a través del medio de comunicación se puede hacer en los siguientes puntos: punto número 3.- “cuando la administración pública estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación de todos”, debemos de tener en cuenta que aquí no solo él era la única persona posiblemente afectada, existen 22 personas y para esto voy a hacer conocer a sus autoridades de la parte contraria que mediante oficio de la MTADSCOFI200720231052 se puso en conocimiento a las diversas partes implicada, esto es a personas que se encontraban aledañas de la vía específicamente el número 1 el propietario Moreno Gionato Roberto Arnaldo quien recibió el documento de manera presencial, el señor o la compañía Solufactory S.A. que también se encuentra aledaña al hoy accionante así mismo pasa por la vía y que es objeto de esta construcción también fue recibido por la persona, y así en general estos simplemente son documentos a manera de referencia para que puedan sus autoridades entender que de acuerdo al artículo 167 numeral 3 nosotros podíamos ejercer tal notificación de acuerdo a las competencias que la misma norma establece, por eso yo me ratifico en mi primera intervención de dejar también claro que lo que pretende la parte accionante es un beneficio de carácter patrimonial, ellos no pueden tener acceso como tal a una indemnización porque la misma norma lo establece y no lo permite debido al tipo de porcentaje que ha sido aplicado, y de igual manera este tipo de acción planteada incurre en los requisitos de improcedencia que hasta ahora ha sido la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en su artículo 42 numerales 1 y 3, el mismo documento que acabo de hacer mención simplemente a manera de referencia y que pongo en consideración de la parte contraria por principio de contradicción”.

DERECHO DE ÚLTIMA PALABRA:

“En cuanto a lo manifestado por el representante del Municipio este indica haber notificado en persona, lo cual, trasgrede también lo dicho por la norma porque la normal es clara y dice “si de haber constancia debe ser notificado en persona” hecho que no sucedió. Hizo referencia y alusión sobre el artículo 164 del COA que indica y refiere exclusivamente sobre la notificación a los medios de comunicación, y aquí en este sentido hay que ser claro, dice, el acto administrativo notificará a través de los medios de comunicación en los siguientes casos; cuando las personas o destinatarios sean desconocidas (hecho que no ha sucedido por cuanto el señor ya tiene varios años viviendo en dicha localidad y es más, lo conocen claramente cuál es la propiedad por cuanto en los registros del mismo municipio han ingresado solicitudes y han emitido informe predial de regulación urbana y uso de suelo en

la cual consta también toda la longitud del terreno) otro también de los requisitos dice, cuando el acto tenga como destinatario la pluralidad indeterminada de personas, cuando las administraciones públicas tienen que las notificaciones efectuadas a un solo interesado es suficiente para garantizar la notificación de todo, siendo este último caso adicional a la notificación efectuada, cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento en concurso público, y quinto cuando se ignore el lugar de notificación de los procedimientos iniciados de oficio, ese requisito no lo ha cumplido y no se cumple por cuanto no solamente se debe basar en la notificación en la prensa por cuanto ellos si conocían cual era la ubicación y el domicilio de la persona accionante. Así mismo, aquí no estamos debatiendo si el Municipio ha realizado o no ha realizado una servidumbre real en una declaratoria pública, cualquiera que sea de los dos casos debe de cumplir con el procedimiento que la ley establece, no se le puede vulnerar los derechos a la defensa o los derechos Constitucionales a cualquier persona porque así lo consagra la Constitución, y es lo que ha transgredido el Municipio al no haber realizado el procedimiento conforme corresponde para que pueda ser expropiado, declarado utilidad pública y posteriormente declarada como una servidumbre real, la parte o la porción que está siendo afectada de la propiedad del señor Manuel Agapito Muñoz Pita, y la ley es clara al indicar precisamente que cuando existen construcciones existentes y se han dejado la evidencia del informe pericial, se tiene fotografías y este tribunal se le anexó también unos videos y fotografías donde se visualiza haber existido un construcción la cual fue derribada por el Municipio, es esa la vulneración del derecho porque se ha introducido de manera arbitraria se a confiscado la propiedad del señor Manuel Agapito Muñoz Pita porque no se ha realizado el proceso que corresponde, y se ha procedido a dejar en indefensión dejándolo desprotegido de toda seguridad que le corresponde a su familia”.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Como se manifestó en líneas anteriores, la acción de protección es una garantía jurisdiccional que, conforme lo define el artículo 88 de la Constitución de la República, tiene como propósito amparar directa y eficazmente los derechos reconocidos en la Constitución, pudiendo deducírsela cuando se produzca una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial o a causa de políticas públicas que traduzcan sus efectos en privación del goce o ejercicio de derechos constitucionales, o cuando la violación sea el efecto de un acto violatorio de derechos constitucionales por parte de un particular, siempre que aquel sea antecedente productor de un daño grave, sea porque el agente privado presta servicios públicos impropios, o actúa como delegatario o concesionario del Estado, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, o haya sido víctima de discriminación o se halle en un estado de indefensión.

En concordancia con lo anotado, el artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la acción de protección procede contra todo acto de una autoridad pública no judicial que viole, haya violado, menoscabe, disminuya o anule el goce o ejercicio de un derecho constitucional;^[5] por su parte, el artículo 39, de la mencionada ley se refiere a la protección de los derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales sobre derechos humanos; entonces el amparo abarca a todos los derechos que conforman el bloque de constitucionalidad;^[6] es decir, derechos constantes en Pactos y Tratados Internacionales que han sido ratificados por el Ecuador, inclusive derechos desarrollados por jurisprudencia

internacional emitida por organismos de los cuales Ecuador es miembro, por ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Constitucional del Ecuador, respecto del objeto de la acción de protección, en diversas sentencias ha determinado que esta garantía fue consagrada en la Constitución del 2008 como la herramienta para proteger los derechos constitucionales de las personas frente a vulneraciones o lesiones a sus derechos por parte de la autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Además, la Corte ha puntualizado que la acción de protección tiene dos objetivos primordiales: *“la tutela de los derechos constitucionales de las personas, así como la declaración y la consiguiente reparación integral de los daños causados por su violación”*.^[7]

Respecto a la vulneración de los derechos constitucionales, la Corte Constitucional ha manifestado que: *“(...) los derechos constitucionales deben ser observados desde todas las dimensiones que abarcan, ya sea desde el análisis de la función que cumplen, de su desarrollo infraconstitucional, así como de las modalidades que estos pueden tener”*;^[8] por ello, le corresponde a la jueza o al juez constitucional caso a caso discernir si se trata de una vulneración a un derecho constitucional o si lo que se pretende es el reconocimiento de un derecho, porque en este caso se estaría frente a un caso de justicia ordinaria; asimismo, debe verificar si el derecho constitucional vulnerado no está protegido por las otras garantías jurisdiccionales.

Derechos presuntamente vulnerados.- De acuerdo al legitimado activo, los derechos constitucionales vulnerados por parte del Estado Ecuatoriano a través del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta son: *“el derecho a la Seguridad Jurídica, Debido Proceso en la garantía de motivación y defensa, y derecho a la propiedad”*; señala el accionante que los derechos violados se encuentran declarados y protegidos por la Constitución de la República del Ecuador en los artículos 82, *“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas, previa, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”*; artículos 76.7 literal 1, *“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. (...) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (...) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. (...)”*; artículo 321 *“Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.”* y artículo 323 *“Art.- 323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.* Que los referidos derechos constitucionales fueron vulnerados en

razón de que el señor Manuel Agapito Muñoz Pita es propietario de un lote de terreno ubicado en las inmediaciones de sitio Barbasquillo o en la parte posterior de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en este lugar, el Municipio ha empezado a construir una obra que constituye en trazar una vía de dos carriles que conecta entre la ciudadela universitaria y la C32 o vía Barbasquillo, pero resulta que al momento de realizar esta obra, el Municipio no toma en consideración el procedimiento legal que corresponde y ha procedido a ocupar una parte de la propiedad del señor Manuel Agapito Muñoz Pita y ha procedido a tumbar el cerramiento que fue construido por columnas de hormigón armado y cerramiento de mallas con estructuras metálicas de tubos galvanizados, esto sin mediar ningún tipo de autorización, sin mediar algún tipo de procedimiento legal, sin mediar ningún tipo de notificación, y sin mediar ningún tipo de declaratoria de utilidad pública, sin mediar, siquiera ningún, tipo de indemnización por la ocupación de dicha parte del predio, el cual está siendo afectado. Que el Municipio tenía el deber de notificar al hoy accionante con una declaratoria de utilidad pública previamente a hacer uso del predio del cual el señor Manuel Agapito Muñoz Pita es propietario y esto constituye, en resumen, como una confiscación del bien, por cuanto no ha mediado procedimiento alguno para poder realizar la ocupación, y sobre todo el derribo de la infraestructura o cerramiento que se encontraba implantada en dicho lugar como delimitación de la propiedad.

Al respecto, es importante señalar que la Constitución de la República, vigente a partir del 2008, trajo consigo un nuevo marco constitucional, a través del cual se protege a los derechos constitucionales reconocidos en el texto constitucional y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos y aquellos que se desprenden de la dignidad de las personas, estableciendo una igualdad jerárquica entre ellos y en consecuencia una protección integral de éstos, sin embargo los derechos constitucionales deben ser observados desde todas las dimensiones que abarca **para determinar si se trata en realidad de la vulneración de un derecho constitucional como tal o de hechos que deben ser resueltos a través de la justicia ordinaria**. En este sentido la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado que el derecho a la tutela judicial efectiva es aquel por el cual toda persona tiene la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para que, a través de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas. Este derecho constitucional se encuentra estipulado en el artículo 75 de la Constitución de la República, que establece: *"Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión"* y se establece como un derecho de protección, para garantizar a toda persona el cumplimiento de los principios de inmediación y celeridad. El derecho a la tutela judicial efectiva incluye además la posibilidad de reclamar a los órganos judiciales la apertura de un proceso, para obtener una resolución motivada y argumentada sobre una petición amparada por la ley. Esto conduce a que, independientemente pero en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, se establezca en la Constitución, en su artículo 76, el derecho al debido proceso, estatuido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales, incluidas las administrativas, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos. Complementariamente, la Constitución establece, de los números 1 al 7 del citado artículo 76, las garantías básicas que caracterizan al debido proceso como: el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; la presunción de inocencia; a no ser sancionado por un

acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción; la manera en que se obtengan las pruebas; el in dubio pro reo; la proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, y el derecho a la defensa, con sus garantías específicas. Ligado al derecho del debido proceso, se encuentra la garantía básica de la aplicación de las normas y derechos que les asisten a las partes, como lo establece el numeral 1 del artículo 76 de la Constitución de la República, definiéndose como la diligencia sustancial que tienen que aplicar los administradores de justicia, al momento de resolver una controversia, en el sentido de tomar en cuenta los derechos y normas preexistentes que, en determinado momento facultan las partes para tomar una posición frente al objeto mismo de la controversia y de las cuales depende la validez de lo pretendido por cualesquiera de ellas. Por otro lado, la seguridad jurídica es un valor jurídico implícito y explícito en nuestro orden constitucional e infraconstitucional vigente, en virtud del cual el Estado provee a los individuos del conocimiento previo de las conductas que son jurídicamente permitidas y dentro de las cuales las personas pueden actuar^[9]. Es así que el derecho a la tutela judicial imparcial y expedita de los derechos de las personas tiene relación con el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para que, luego de un proceso que observe las garantías mínimas establecidas en la Constitución y la ley, se haga justicia; por tanto, se puede afirmar que su contenido es amplio y en éste se diferencian tres momentos: el primero relacionado con el acceso a la justicia, el segundo con el desarrollo del proceso en un tiempo razonable, y tercero que tiene relación con la ejecución de la sentencia, esto es, acceso a la jurisdicción, debido proceso y eficacia de la sentencia";^[10]. Dicho esto, se concluye que la tutela judicial implica una serie de actuaciones por parte del Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, que permiten asegurar el efectivo goce y cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución de la República para la obtención de una resolución judicial motivada, la cual deberá ser ejecutada integral y adecuadamente. En este contexto, se pueden identificar tres fases que componen este derecho: 1) acceso al órgano jurisdiccional; 2) tramitación conforme el debido proceso para obtener una resolución motivada; y, 3) ejecución de la decisión; derecho que se encuentra relacionado con el debido proceso. La Corte Constitucional, ha recogido ampliamente en su Jurisprudencia que las garantías del debido proceso deben ser garantizadas no solo para las partes sujetas en un proceso judicial, sino que deben ser observadas por toda autoridad administrativa dentro de procesos en los cuales se determinan derechos y obligaciones, textualmente recoge: "Ante las circunstancias particulares de este caso concreto, la Corte Constitucional señala que conforme a lo expresado en su jurisprudencia, se debe respetar el derecho de las partes o sujetos procesales de participar en igualdad de condiciones en un proceso administrativo, a ser escuchados, a presentar argumentos, a contradecir, entre otros derechos y garantías propias que deben cumplirse en procura de que quienes son sometidos a procesos en los cuales se determinen derechos y obligaciones, gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos administrativos un proceso exento de arbitrariedades (...)" ; asimismo, **con el derecho a la seguridad jurídica**, lo que guarda relación con el artículo 226 de la Carta Magna, según el cual las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y en la ley; tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. De la misma forma, la Corte Constitucional, señaló que el derecho de la seguridad jurídica en el contexto de los procesos judiciales obliga a los administradores de justicia a observar

las normas jurídicas que componen el ordenamiento jurídico, las mismas que deben haber sido expedidas de manera clara, previa y pública.^[11]

¿En qué circunstancias, procede la tutela a través de la acción ordinaria de protección de los derechos invocados? Para dilucidar esta interrogante, se hace imprescindible señalar que, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, estos derechos efectivamente se encuentran tutelados, de este modo, la Corte Constitucional del Ecuador, ha expresado, lo siguiente: “(...) **Bajo la Concepción del Estado Constitucional de Derechos y justicia, los derechos constitucionales no son declarados, sino tutelados, dado que estos pre existen, lo único que se declara en las acciones de garantías jurisdiccionales son las vulneraciones que ocurren a los derechos constitucionales. Cosa distinta en la justicia ordinaria, toda vez, que, mediante el ejercicio de sus competencias, lo que se pretende es la declaración del derecho y su correspondiente exigibilidad (...)**”^[12]. (lo subrayado fuera del texto). Ahora bien, a fin de determinar bajo qué escenario se encuentran los argumentos del legitimado activo, corresponde confrontar los argumentos vertidos en la demanda, sobre los cuales sustenta la acción constitucional de protección, a fin de determinar si nos encontramos ante la violación de los derechos al debido proceso en la garantía de la motivación y defensa, seguridad jurídica y propiedad, de acuerdo a los postulados planteados en la Constitución de la República e Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, citados en líneas que anteceden, concluyéndose de la simple lectura del libelo y de los hechos narrados en la audiencia pública, que no estamos frente a circunstancias que vulneren dichos derechos, reconocidos como tal en la Norma suprema puesto que del libelo de la demanda y de lo expuesto en la audiencia, se advierte que el tema central de la reclamación se encamina a que el Municipio de Manta ha tomado parte del lote de terreno e inmueble del accionante para la construcción de una vía pública de doble carril que une la ciudadela Universitaria con el sector de Barbasquillo. Sin embargo es menester resaltar que el artículo 11 numeral 3 de la Constitución señala que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte; y el numeral 9 establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; y en consonancia con dichos principios constitucionales, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, establece los requisitos para deducir la acción de protección, por lo que deberán concurrir las siguientes circunstancias: 1) Violación de un derecho Constitucional; 2) Acción u omisión de una Autoridad Pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3) Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado; en virtud de lo manifestado, se hace imprescindible señalar que el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control constitucional (LOGJCC) expresa taxativamente los casos en que resulta improcedente la acción de protección, estableciendo, en los números 1 y 4 lo siguiente: “La Acción de Protección de Derechos no procede: ***1. Cuando de los hechos no se desprenda que exista una violación de derechos constitucionales***” (...) ***4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado por la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz*** (...)”^[13]; de lo dicho se puede establecer de manera diáfana que la acción de protección procede cuando efectivamente exista una vulneración de derechos constitucionales y no cuando se trata de asuntos de mera legalidad, en razón de que existen vías idóneas para la reclamación de derechos, particularmente la vía

administrativa. En ese sentido, es importante señalar que el más alto tribunal de justicia constitucional, a través del precedente jurisprudencial obligatorio^[14] ha señalado: “Las juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección, deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos constitucionales en sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos del caso concreto. **Las juezas o jueces constitucionales únicamente, cuando no encuentren vulneración de derechos constitucionales y lo señalen motivadamente en su sentencia, sobre la base de los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para resolver el asunto controvertido.**” (lo resaltado fue del texto). En el caso sub júdice el accionante señala que el Municipio de Manta no ha tomado en consideración el procedimiento legal que corresponde para la construcción de la vía que une la ciudadela universitaria y la vía Barbasquillo y ha procedido a ocupar parte de la propiedad del señor Manuel Agapito Muñoz Pita, tumbando, para el efecto, el cerramiento que fue construido por columnas de hormigón armado y cerramiento de mallas con estructuras metálicas de tubos galvanizados, sin mediar ningún tipo de autorización, sin mediar algún tipo de procedimiento legal, sin mediar ningún tipo de notificación, y sin mediar ningún tipo de declaratoria de utilidad pública, sin mediar siquiera ningún tipo de indemnización por la ocupación de dicha parte del predio, el cual está siendo afectado; no obstante, de los hechos expuestos en la respectivamente audiencia, no se desprende que exista vulneración de derechos constitucionales, pues del análisis minucioso realizado a los documentos incorporados tanto por el accionante como por el accionado, se desprende con meridiana claridad, que la imposición de servidumbre real para la construcción de obras, constituye una facultad exclusiva y excluyente propias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; así tenemos que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 264 señala que “(...) los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. (...) 3. **Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.** (...) (lo resaltado fuera del texto); paralelamente el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) en el artículo 3, establece los principios que en el ejercicio de la autoridad y las potestades públicas se deben regir los gobiernos autónomos descentralizados, entre ellos el de solidaridad en el ejercicio de la autoridad y de las potestades públicas del GAD, competencias exclusivas constitucionales que le corresponden a los GAD municipales, las mismas que están previstas en el artículo 54 cuando señala “(...) Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; (...) c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; y f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y **construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y**

equidad (...)” (lo resaltado me pertenece); y como facultad del acalde, las señaladas en el artículo 60 del mismo cuerpo normativo. En ese sentido, fue incorporado como prueba por parte de la entidad accionada, la resolución ejecutiva emitida por el entonces señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta, abogado Agustín Intriago Quijano, la misma que se encuentra signada con el número MTA-2023-ALC-087, que fue suscrita a los 14 días del mes de julio del año 2023, mediante la cual, fundamentado en el artículo 488 del COOTAD que literalmente establece “(...) *Servidumbres reales.- El municipio o distrito metropolitano podrá imponer servidumbres reales en los casos en que sea indispensable para la ejecución de obras destinadas a la prestación de un servicio público, siempre que dicha servidumbre no implique la ocupación gratuita de más del diez por ciento de la superficie del predio afectado. (...)*”, impuso la servidumbre real sobre los bienes inmuebles constantes en los informes técnicos, dentro del cual consta el bien inmueble del ciudadano Muñoz Pita Manuel Agapito, con una afectación de 149.57 que constituye el 1.12% del área del predio; resolución ejecutiva que fue debidamente notificada a todas las personas afectadas, tal como obra de la documentación incorporada por la parte accionada, a través del medio de comunicación La Marea con fecha 22 y 23 de septiembre de 2023, amparado en lo que determina el artículo 164 del Código Orgánico Administrativo (COA) que señala: “*Es el acto por el cual se comunica a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas, el contenido de un acto administrativo para que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos. (...) La notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se realizará personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación, ordenado por estas.*”. Es decir, la entidad accionada, en uso de sus facultades constitucionales y legales ha impuesto una servidumbre real en el 1.12% del predio de propiedad del ciudadano Manuel Agapito Muñoz Pita, el cual fue notificado legalmente a través del medio de comunicación social de gran circulación, tal como lo señala la norma; sin que se advierta, por parte de este voto de mayoría, ninguna vulneración a los derechos constitucionales del ciudadano accionante; y, si el legitimado activo requiere que exista una indemnización por dicha ocupación, pues existe un procedimiento administrativo idóneo y eficaz para efectuar dicha reclamación, que no es la constitucional, ya que no se pueden reclamar derechos cuando se menoscaban otros a pretexto de reclamar disposiciones constitucionales que personalmente se están violando, ya que disponer que se detenga la construcción de una obra municipal, soslayando las normas contenidas en la Constitución de la República y el Código Orgánico Administrativo, sería atentar contra el derecho a la seguridad jurídica como garantía de estabilidad en base a la existencia de una norma previa, clara, pública y aplicada por autoridad competente, por lo cual se torna improcedente la acción de protección planteada.

Como se observa en el caso de análisis, en la reclamación a través de la garantía constitucional de acción de protección, se señala que se le ha violado su derecho a la seguridad jurídica, motivación, defensa y propiedad por haber el Municipio ocupado parte del terreno de su propiedad sin ningún tipo de procedimiento, lo cual queda plenamente desvirtuado con la propia documentación entregada por la parte accionada, en la que consta la resolución ejecutiva número MTA-2023-ALC-087, la cual fue suscrita a los 14 días del mes de julio del año 2023, mediante la cual se impuso la servidumbre real sobre los bienes inmuebles constantes en los informes técnicos, dentro del cual consta el bien inmueble del ciudadano Muñoz Pita Manuel Agapito, con una afectación de 149.57 que constituye el 1.12% del área del predio; la cual fue debidamente notificada a través del medio de

comunicación social de gran circulación en la ciudad (La Marea), con fecha 22 y 23 de septiembre de 2023; y si bien el accionante manifestó que se le debió notificar de manera personal, este voto de mayoría considera que la notificación realizada a través de comunicación se encuentra plenamente amparada en los artículos 164 y siguientes del Código Orgánico Administrativo que señala claramente las formas en que debe realizarse la notificación, los casos en que puede realizarse mediante los medios de comunicación, lo cual ha sido observado por la institución accionada; y respecto del tema de la indemnización por la ocupación de su propiedad, existe en la norma, la vía idónea y eficaz para realizar su reclamación que no tiene que ver con la esfera constitucional, por lo que mal podría el tribunal **aceptar una acción constitucional de acción de protección, por encima de las vías jurídicas previamente determinadas y que justamente son las que fundamentan el principio de seguridad jurídica**, por cuanto en la vía constitucional, si bien es cierto lo que se pretende determinar es la existencia o no de vulneración de derechos constitucionales, en esta no se puede bajo ningún motivo realizar análisis de temas legales, propios de la jurisdicción ordinaria.

Ahora bien, respecto al análisis de aspectos que por su naturaleza, corresponde su resolución a la justicia ordinaria, y no a garantías jurisdiccionales como la acción de protección, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: "(...) *la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la tutela de estos derechos que no sean las garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria (...) La acción de protección no constituye un mecanismo de superposición o reemplazo de las instancias judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el desconocimiento de la estructura jurisdiccional estatal establecida por la Constitución (...) La acción de protección procede solo cuando se verifique una real vulneración de derechos constitucionales, con lo cual, le corresponde al juez verificar y argumentar si existe o no la vulneración de un derecho constitucional. Es a él a quien le corresponde analizar caso a caso, sobre la base de un ejercicio de profunda razonabilidad, los hechos y las pretensiones del actor para poder dilucidar si se trata de un caso de justicia constitucional o si por el contrario, por su naturaleza infraconstitucional su conocimiento le corresponde a la justicia ordinaria.¹⁵¹ (lo resaltado fuera del texto).*

En consecuencia, habiendo quedado determinado a través del análisis correspondiente, el campo de acción del Derecho a la seguridad jurídica, debido proceso en garantía de defensa y motivación, y propiedad, en el contenido constitucional, y concluyéndose que las expresiones vertidas por el accionante a través de su demanda y en el desarrollo de la audiencia, no se encuentren inmersos en estos requisitos, se vuelve improcedente la acción planteada, en consecuencia la acción constitucional propuesta no puede ser aceptada por no observar que exista vulneración a los derechos de rango constitucional alegados. **RESOLUCIÓN.-** Con los fundamentos determinados en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo expuesto y sin otras consideraciones que realizar, este juzgador plural por VOTO DE MAYORÍA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA

REPÚBLICA, resuelve declarar **IMPROCEDENTE** la acción de protección propuesta por **MANUEL AGAPITO MUÑOZ PITA**, en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Manta. Ejecutoriada esta sentencia remítase copias certificada de la misma a la Corte Constitucional en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86.5 de la Constitución de la República del Ecuador. Incorpórese al expediente el escrito presentado por la Abogada Iliana Jazmín Gutiérrez Toromoreno y delegada por la señora Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta, abogada Valdivieso Zamora, mediante el cual otorga procuración judicial amplia y suficiente a los abogados Simón Jhon Santana Burgos, Rubén Darío Franco Ayón, María Cecilia Menéndez Palacios y Wilmer Oswaldo Ruiz Ramírez para que intervengan en la presente causa en defensa de los derechos e intereses del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta. Tómesese en cuenta los correos electrónicos juridico@manta.gob.ec; iliana_gutierrez@manta.gob.ec; simon_santana@manta.gob.ec; ruben_franco@manta.gob.ec; y, wilmer_ruiz@manta.gob.ec; así como el casillero electrónico 24813080001. - Actúe el Ab. Marlon Cedeño Palma en calidad de secretario del Tribunal. **CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-**

1. [^] *Constitución de la República del Ecuador, art. 88.*
2. [^] *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, art. 39.*
3. [^] *Corte Constitucional del Ecuador, sentencia 146-14-SEP-CC, caso 1773-11-EP, párr. 1.*
4. [^] *Ibidem, párr. 1.*
5. [^] *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, art. 41.*
6. [^] *Constitución de la República del Ecuador, art. 11, núm. 7: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento”.*
7. [^] *Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N° 0140-12-SEP-CC, caso N° 1739-10-EP*
8. [^] *Corte Constitucional del Ecuador, sentencia 146-14-SEP-CC, caso 1773-11-EP, párr. 1.*
9. [^] *Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. °210-15-SEP-CC, Caso No. 0495-11-EP*
10. [^] *Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 117-14-SEP-CC. Caso No. 1010-11-EP.*
11. [^] *Corte Constitucional mediante sentencia No. 037-16-SEP-CC, emitida dentro del caso No. 0977-14-EP*
12. [^] *Corte Constitucional del Ecuador, ha expresado mediante sentencia # 102-13-SEP-CC, caso # 0380-10-EP*
13. [^] *Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Art.42.*
14. [^] *Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N° 001-16-PJO-CC, caso N° 0530-10-JP*

15. ^ *Corte Constitucional del Ecuador, caso N.º 1000-12-EP, sentencia N.º 0016-13-SEP-CC.*

f: FUENTES ZAMBRANO CARLO ABRAHAM, JUEZ TRIBUNAL UNICA DE GARANTIAS PENALES DE MANABI; ROMERO CEDEÑO LORENA ISMAILDA, JUEZ TRIBUNAL GARANTIAS PENALES DE MANABI; JOSE LUIS ALARCON BOWEN, JUEZ TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE MANABI

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

MOLINA INTRIAGO FÉLIX BRIAN
SECRETARIO